



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, cinco de agosto de dos mil veintidós

21-334

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **MARTHA LUCIA QUICENO DURANGO**
Demandado: **COLPENSIONES, y PROTECCIÓN S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-009-2020-00389-01.
Tema: ineficacia traslado
Decisión: **CONFIRMA Y ADICIONA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Protección y Colpensiones contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

Conforme al memorial allegado se reconoce personería a la dra ANA MARIA NÚÑEZ OCHOA, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.527.806 de Medellín abogada inscrita con Tarjeta Profesional No. 133.395 del C.S.J., para representar los intereses de COLPENSIONES conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.915.453 en su condición de representante legal suplente de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S. sociedad legalmente constituida mediante documento privado del 25 de abril de 2.015, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el registro No 6.064 del Libro IX, identificada con NIT. No. 900.847.273-4, según consta en el certificado de Existencia y Representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, en ejercicio del PODER GENERAL otorgado mediante escritura pública No. 3365 de 2019, por la Administradora Colombiana de Pensiones “COLPENSIONES”, identificada con NIT 900.336.004-7.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 022** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante que tras la declaratoria de **INEFICACIA** de la afiliación a las administradoras del RAIS se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida y sin solución de continuidad. Y en consecuencia se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar la totalidad de los valores que hubiere recibido con motivo del traslado de régimen y el total del ahorro que efectuó, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora por riesgos de invalidez y sobrevivientes, con todos los frutos e intereses, esto es, rendimientos causados, incluyendo el porcentaje aportado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, las cuotas de administración y las comisiones, sumas que deberá recibir COLPENSIONES realizando la reactivación de su afiliación al sistema.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 30 de mayo de 1964.
- ✓ Que estuvo afiliada en el ISS hasta el 7 de julio de 1995 cuando suscribió solicitud de vinculación, trasladándose al RAIS concretamente a la AFP PROTECCIÓN.
- ✓ Que en toda su vida laboral ha cotizado 1.895 semanas, teniendo en cuenta 1.290 semanas cotizadas a PROTECCIÓN y 605 semanas del bono pensional.
- ✓ Que la vendedora, promotora, comisionista de PROTECCIÓN le brindó una información mínima, insuficiente, inexacta y errónea, indicándole principalmente que el ISS se iba a terminar y sería liquidado debido a los inconvenientes económicos del RPM en esa época, resaltando los beneficios generales del RAIS sin hablarle de desventajas de este régimen, ni los riesgos que correría al trasladarse como la edad de redención de su bono pensional o que pensión dependería del capital ahorrado, entre otros.
- ✓ Que tampoco le informaron de la posibilidad de retornar al RPM por medio del año de gracia que estableció la Ley 797 de 2003.
- ✓ Que el 16 de marzo de 2011 recibió re-asesoría pensional en la cual le aconsejaron quedarse en la AFP PROTECCIÓN.
- ✓ Que PROTECCIÓN solo tiene el formulario de afiliación como soporte sobre su traslado del RPM al RAIS.
- ✓ Que de estar en el Régimen de Prima Media percibiría una mesada pensional superior que de estarlo en el Régimen De Ahorro Individual Con Solidaridad.

- ✓ Que solicitó retornar al RPM a Colpensiones, pero dicha entidad negó su petición por que le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido oponiéndose a las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, PROTECCIÓN aceptó como cierta la fecha nacimiento de la actora, que se encuentra afiliada a esa entidad, que solo cuenta como soporte sobre el traslado de régimen el formulario de afiliación y lo ateniende a la re-asesoría brindada a la actora con la recomendación de permanecer en el RAIS. De otro lado, indicó que no es cierto que se haya omitido el deber de información al momento de la afiliación, toda vez que los asesores del fondo son permanentemente capacitados a fin de que puedan suministrar toda la información completa y necesaria a los potenciales afiliados, por tanto es claro que a la actora se le brindó toda la información frente a las características del RAIS y las diferencias con el RPM, así como las ventajas y desventajas del Régimen de Ahorro Individual, por lo que su afiliación fue libre y voluntaria y por tanto no es cierto que haya sido engañada al momento de afiliarse, ya que las condiciones pensionales son diferentes en ambos regímenes. Frente a los restantes hechos indicó que no le constan por lo que deberán ser probados.

Por su parte, COLPENSIONES aceptó como cierto la fecha de nacimiento de la demandante y los trámites efectuados con el fin de lograr retornar al RPM. Frente a los demás indicó que no le constan por ser afirmaciones ajenas a esa entidad y solo le conciernen a la AFP PROTECCIÓN.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia de la afiliación al RAIS, advirtiéndole que la demandante había permanecido en el régimen de prima media sin solución de continuidad. CONDENÓ a PROTECCIÓN que una vez alcance ejecutoria la presente providencia, proceda a trasladar a COLPENSIONES todos los dineros que haya recibido con motivo de traslado o vinculación de la demandante, a esa entidad y por el periodo en que estuvo afiliada a la AFP incluyendo lo acumulado en la cuenta individual, los valores cobrados a título de cuotas de administración y comisiones, los aportes para garantía de pensión mínima y las cuotas de seguros previsionales con los respectivos

rendimientos. Igualmente CONDENÓ a COLPENSIONES a recibir las anteriores sumas teniéndolas como semanas efectivamente cotizadas y reactivar la afiliación de la actora sin solución de continuidad.

Finalmente condenó a PROTECCIÓN S.A. a pagar las costas del proceso a favor de la demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$908.526.

Dentro del término concedido por la ley, PROTECCIÓN y COLPENSIONES interpusieron y sustentaron el recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN

2.2.1. APELACIÓN DE PROTECCIÓN

Solicita que se revoque la sentencia de primera instancia respecto a las devoluciones de la comisión de administración y la prima de seguros previsionales, ya que son descuentos autorizados por la Ley 100 de 1993 en su artículo 20 y modificado por el Artículo 7° de la Ley 797 de 2003, facultando a PROTECCIÓN para realizar el descuento de los aportes correspondientes al sistema general de pensiones, ese mencionado descuento del 3% se usa para que los fondos pueden cubrir los gastos de administración y para poder pagar la prima de seguros previsionales que operan en ambos regímenes tanto en el RAIS como el RPM.

Expuso que en el expediente se adjunta el certificado de los rendimientos dónde la demandante, tiene aportes por \$55.000.000 de pesos y se le entregaron rendimientos por \$134.000.000 de pesos, abonados a su cuenta de ahorros de ahorro individual por la buena gestión de PROTECCIÓN, considerando el recurrente que tiene derecho a conservar esa comisión como una restitución mutua,

señala que de devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual, más los rendimientos financieros, y considera que se genera un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES por recibir una comisión que ni siquiera es destinada a financiar la pensión de vejez de la afiliada tomando como fundamento el artículo 1746 del Código Civil, la sentencia con radicación 31989 de la Corte Suprema de Justicia, del 9 de septiembre de 2008 M.P. DR. Eduardo López Villegas y la Superintendencia Financiera de Colombia, para que se dé cumplimiento al artículo 7° del Decreto 9995 de 2008 que establece que cuando se da un traslado de régimen se debe trasladar el dinero de cuenta de ahorro individual, los rendimientos, el porcentaje correspondiente del fondo de pensión mínima respetando la destinación de los aportes pensionales realizados a la gestión de administración desarrollada por la administradora que genero los rendimientos

Así mismo expreso que en igual sentido la Superintendencia Financiera de Colombia considera que tampoco se debe trasladar la prima de seguro previsional en atención que dicho porcentaje ya se sufragó a la compañía aseguradora para que en caso de existir un siniestro de sobrevivencia o invalidez dicha compañía pague una suma adicional con el fin de financiar dichas pensiones y más aún cuando el juez, ha generado un proceso de ineficacia con valores probatorios, es decir, se pudo probar que se le dio información en el año 1995 y que inclusive recibió re asesoría en el año 2011, también nótese que esta administradora tiene condenas de gastos de administración y seguros previsionales e incluso de costas, señaló que el despacho evaluó el tema de la re asesoría con sentencia 1688 de 2019, que a su criterio nada se aplica en comparación al caso en mención, ya que la re-asesoría realizada en dicha providencia fue el 26 de noviembre 2003 por fuera de los lineamientos al deber de información que trae la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010.

Reiteró que con la confirmación de esa condena, PROTECCIÓN debe asumir de su propio patrimonio los valores descontados por mandato legal, es decir, la comisión de administración qué es la autorización legal de los ingresos de la administradora y de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia ya fueron pagados a una aseguradora de destino, entonces estaría en presencia de una condena de perjuicios contra el patrimonio de PROTECCIÓN la cual tendría que revisarse a la luz de una responsabilidad civil, indicando que en el presente proceso no fue materia de prueba ni quedó demostrado la acusación de los mismos, toda vez que si bien para los casos directamente de perjuicios, la inversión de la carga de la prueba no está puesta en cabeza las administradoras o si así estuviera, pues de oficio el juzgado debió haberlo informado hasta la misma admisión de la demanda, entonces frente a esa pretensión de ineficacia de la afiliación no se generó sistema de perjuicios los cuales no fueron demostrados por la parte demandante, motivos por los cuales no se debe reintegrar estos dos valores

Finalmente manifestó con respecto a esos valores descontados al 3%, señalando que esa comisión de administración y esas primas de seguros previsionales si opera el fenómeno de las prescripciones solicitadas, toda vez que son conceptos que se van descontándose en la periodicidad del tiempo y de la ley y no financian directamente la prestación económica por vejez por lo que son conceptos que sí prescriben de conformidad a lo establecido en el Artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo en armonía con el Artículo 151 del Código Procesal Laboral, que establece que en el transcurso del tiempo de 3 años hace que opere el fenómeno jurídico de la prescripción sobre lo demandado, lo que debe afectar todas y cada una de las reclamaciones formuladas.

2.2.2. APELACIÓN COLPENSIONES

Solicitó adicionar a la sentencia, en el sentido de ordenar a PROTECCIÓN la indexación de los valores a restituir por gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia del porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, esto pues aunado al capital ahorrado de los rendimientos que reposan en la cuenta de ahorro individual de la actora. Así mismo indica que también se debe adicionar indicado cual es el plazo en el que se deben retornar estos dineros a la administradora colombiana de pensiones que no sea mayor a 30 días, sustentando con que han tenido muchos casos dónde las administradoras de fondos de pensiones privados dilatan la devolución de los aportes en el tiempo y termina siendo COLPENSIONES la entidad que debe asumir más adelante los intereses moratorios del retroactivo por falta de recursos.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE COLPENSIONES

Señaló que conforme quedó probado en el proceso, COLPENSIONES no tuvo ningún tipo de injerencia en el traslado que hubiese realizado la señora MARTHA LUCIA QUICENO DURANGO, del RPMPD a la AFP del RAIS, PROTECCIÓN S.A., el 07 de julio de 1995, que según lo expuesto en el litigio se realizó de manera voluntaria por la parte demandante conforme a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, siendo entonces responsabilidad de las entidades codemandadas cumplir con los deberes regulados en la normatividad aplicable, tales como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 663 de 1993, la Ley 100 del mismo año y la múltiple jurisprudencia desarrollada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, respecto al tema de la declaratoria de ineficacia del traslado.

De otro lado aduce que en virtud de dicha línea jurisprudencial y normativa citada, se puede evidenciar que la declaratoria de la ineficacia, conlleva además unas consecuencias, tales como,

que se asuma que la persona siempre estuvo afiliada al RPMPD sin solución de continuidad, con la obligación a cargo del fondo privado de trasladar a COLPENSIONES no sólo las cotizaciones, de conformidad con lo prescrito en el artículo 20, inciso 1° de la Ley 100 de 1993, sino también las cuotas de administración que consagra el inciso 2° del mismo artículo, el cual hace referencia a la distribución de los porcentajes de cotización de los afiliados, indicando para tales efectos, que el 3% del ingreso base de cotización será destinado *“a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes”*, resaltándose que antes de la expedición de la ley 797 de 2003, y de conformidad con la Resolución 2549 de 1994, la cuota de administración en favor de éstas entidades era del 3.5%. Por lo tanto, dichos emolumentos deben ser consignados a COLPENSIONES en su totalidad, en virtud de la sostenibilidad financiera del sistema y en aras de evitar un detrimento de la entidad. La cuota de administración es definida por el Decreto Reglamentario 656 de 1994, en su artículo 39, como aquella que *“constituyen ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho”*, disponiendo de manera taxativa que conceptos son objeto de las mismas, concordado esto con el literal “f” del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, el cual consagra que, “f. El patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la rentabilidad mínima de que trata el literal anterior y el desarrollo del negocio de administración del fondo de pensiones.

Insiste que de no ordenarse el traslado de todos los conceptos, se presentaría un enriquecimiento sin justa causa a su favor y en desmedro de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, en razón a que la entidad que represento, NUNCA, desde que la demandante se afilió al RAIS, tuvo en su haber, la destinación o administración de esas sumas dinerarias, las cuales le hubiesen servido a efectos de capitalizar el fondo de naturaleza común. No hay duda que las cuotas de administración que cobran las administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, corresponden a ingresos que le permiten a dichos fondos generar o fortalecer su patrimonio, todo ello, en virtud de la afiliación obligatoria al sistema general de pensiones efectuada por los cotizantes, de ahí, que al declararse la ineficacia del traslado, en virtud a una afectación de la selección libre y voluntaria del régimen pensional, estos dineros conjuntamente con sus rendimientos, deben ser trasladados a COLPENSIONES, tal y como lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL17595-2017, radicado 31989 de 2008, 8 sep. 2008, SL4989-2018 Radicación N° 47125, y la SL1688 del 8 de mayo de 2019, entre otras.

Por tanto indica que en caso de confirmarse la ineficacia del traslado de la parte actora al RAIS, se confirme la devolución de los aportes con sus rendimientos, frutos e intereses, por parte de PROTECCIÓN., además de las cuotas de administración en su integridad como ya se mencionó, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de la pensión mínima, adicionando la decisión respecto a que dichas sumas deberán devolverse debidamente indexadas a COLPENSIONES, además de

consignar los dineros ordenados, en un término perentorio conforme a lo normado en el Decreto 962 de 1994. Lo anterior, en virtud de que, si bien se declaró la ineficacia del traslado realizado por la parte demandante al RAIS, para la administradora del régimen de prima media, es imposible asumir eventualmente alguna obligación prestacional en ausencia de los respectivos aportes y validación de estos.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo con lo manifestado en el recurso de alzada, el problema jurídico a resolver parecería que sólo se circunscribiría a establecer qué haberes le corresponde retornar a la administradora del RAIS accionada y si operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios. Es por ello que inicialmente es necesario determinar si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia.

4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de

suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 7 de julio de 1995 cuando suscribió el formulario de vinculación a COLPENSIONES (fl. 116 del archivo 03 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la supresión del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición.

Expresamente la señora MARTHA LUCIA QUICENO DURANGO en el aludido interrogatorio señaló que es tecnóloga en sistemas y abogada, rememoró que no tenía conocimiento para esa época de cómo se pensionaba en el ISS, puesto que apenas comenzaba su vida laboral y que si sabía que su empleador hacía los aportes para vejez y riesgos de invalidez o muerte. Adujo que cuando empezó la noticia de que el ISS se iba acabar, una asesora de PROTECCIÓN se acercó a su lugar de trabajo, promocionado como la mejor opción esa entidad ya que era del sindicato antioqueño, adujo además que no sabía que estaba realizando un cambio de régimen y que solo conocía que en PROTECCIÓN era como un banco, que podía retirar sus aportes y que se pensionaría antes que en el RPM. Hizo la aclaración que solo vino a entender de los temas de pensión cuando ya estaba inmersa en la prohibición de traslado de régimen dentro de los 10 años faltantes para acceder a la pensión de vejez, añadiendo que solo hasta el 2019 terminó sus estudios en derecho.

Sobre la re-asesoría manifestó que el asesor le realizó cálculos pensionales y le explicó que de permanecer con PROTECCIÓN su pensión sería de \$1.057.000 mientras que en el RPM sería de \$1.383.000 y pese a eso le recomendó que era mejor opción continuar en el RAIS debido a que faltaban 10 años para pensionarse, reconociendo que le creyó a ese asesor y siguió afiliada con esa entidad

Destáquese en este punto que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión total del tema, pues incluso para esa fecha aún no era

abogada, máxime cuando ni siquiera se acreditó, como lo destacó el fallador, la existencia de una explicación completa por parte de un asesor.

En tal contexto, es claro que al momento de suscribir el formulario de vinculación a PROTECCIÓN, la demandante no fue informada sobre las implicaciones de su traslado, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión anticipada en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si el obtener una pensión a una edad inferior es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se les habló de modalidades de pensión, aspecto vital si tenemos en cuenta que en algunas categorías donde existe una renta vitalicia, el riesgo financiero y de longevidad lo corre una aseguradora y no la afiliada por lo que la heredabilidad del capital adquiere otros matices, dado que en caso de muerte ostentando la calidad de pensionada y ante la inexistencia de beneficiarios, el capital de la cuenta de ahorro individual es inexistente al ser utilizado para el pago de una prima única por lo que ningún monto engrosa la masa sucesoral. Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que tuviese claridad que el monto de la mesada estaba íntimamente ligado al cúmulo de aportes y rendimientos que lograrse alcanzar durante su vida laboral.

Por consiguiente, es claro que era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la RE-ASESORÍA de la que fue objeto la demandante el 16 de marzo de 2011 (fl.79 del archivo 09 del expediente digital), pues la información suministrada por el fondo en tal momento, ad portas del cumplimiento de los 47 años, en parte alguna puede asimilarse al cumplimiento del deber de información cuando se surtió el traslado, ni

mucho menos es dable señalar que la persona contaba con la suficiente ilustración para tomar una decisión sobre su futuro pensional.

Incluso, en gracia de discusión, aunque PROTECCIÓN hubiese desmotivado oportunamente la accionante al avizorar la posible inconveniencia de permanecer en dicho fondo, a igual conclusión llegaría la Sala pues ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido que ello NO tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por las razones referenciadas en la sentencia de radicación 68.838 de 2019, entre ellas:

“(…) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información”.

Aunado a ello, si la AFP incumplió su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una re-asesoría a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

De manera que, a la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la administradora de pensiones, cumplir con los deberes de información que aquella norma le impone; exigencia que existe desde la creación de estas entidades y que busca entre otros, garantizar los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe en la prestación del servicio público que tienen a su cargo, conforme lo ha sostenido esta Sala (CSJ SL3708-2021); pero además, deben dar cuenta de que su conducta estuvo ajustada a ello, puesto que conforme al artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo, es decir, que quien debía demostrar en el proceso que su conducta se ajustó a lo descrito en párrafos precedentes era Protección S.A; debiéndose resaltar que, el suministro de la información debe darse en *«todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional e ilustrar y dar a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica»* (SL4360-2019).

Como consecuencia de lo anterior, es que esta Corporación ha sostenido que «Brindar el servicio de reasesoría al afiliado no sana el incumplimiento de la administradora de pensiones de su deber de información por dos razones: la primera, porque el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad implica la pérdida de los beneficios derivados del régimen de transición y, la segunda, porque la oportunidad de información se juzga al momento del acto jurídico del traslado no con posterioridad -un dato sólo es relevante y útil si es oportuno» (SL1688-2019).

Bajo el contexto que antecede y, teniendo en cuenta que no fue un hecho objeto de discusión, que para el momento en que la demandante se trasladó del régimen de prima

media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad la administradora de pensiones, no le brindó la asesoría en los términos exigidos por el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, es claro que, el Tribunal incurrió en la vulneración de la ley denunciada, puesto que conforme a lo dicho en precedencia, el juez de apelaciones no observó; en primer lugar, que conforme a las normas legales sobre validez y eficacia de traslado de régimen pensional, **las administradoras de pensiones tienen el deber de brindar una adecuada asesoría a los afiliados al momento de trasladarse de régimen**, cuando exista cambio entre las administradoras de pensiones del RAIS o cuando exista intención de retornar al régimen de prima media con prestación definida, esto es, **el deber de información también resulta exigible y predicable cuando se está en presencia de una reasesoría, escenarios en los cuales al afiliado se le debe ilustrar sobre las consecuencias positivas y negativas** que su determinación puede acarrearle frente a su futura pensión; en segundo lugar, porque no podía concluir que esa situación quedó saneada con la reasesoría adelantada en el año 2004, pues lo cierto es, que la misma no fue oportuna, ya que tal y como lo pone de presente la parte recurrente, incluso de haber retornado al RAIS en el año 2004, no habría recuperado los beneficios de la transición, por cuanto no cumplía con los 15 años de servicio al 1 de abril de 1994, tal y como lo determinó el Tribunal, por lo que si la demandante no conoció entre otros aspectos dicha situación y, la incidencia que el traslado de régimen pensional podía tener frente a sus derechos prestacionales, no puede concluirse, como lo hizo el Tribunal, la existencia de una manifestación libre y voluntaria, y por tanto, de un consentimiento informado, por lo que su traslado se torna en ineficaz. (Resaltos de esta Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígase aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se CONFIRMARÁ la decisión adoptada por el a quo, toda vez ordenó a PROTECCIÓN devolver todos los aportes realizados, incluyendo los tres conceptos aludidos.

Recordemos que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto,

pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Así las cosas, lo procedente es el retorno de la totalidad del dinero recibido por concepto de afiliación, toda vez que no se puede ver afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente al monto total del correspondiente aporte legal.

Empero, esto no quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años,

generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Conforme los razonamientos que preceden, y pese a los juicios argumentos que en este punto ventila Protección S.A., no es dable acoger su postura, ni aun teniendo en cuenta el concepto que cita de la Superintendencia Financiera de Colombia, toda vez que el mismo no resulta vinculante, pues el criterio que resulta vinculante es el que de forma pacífica y reiterada ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias reseñadas, que constituyen un precedente vertical de obligatorio cumplimiento.

Aclarando que la condena a la devolución de cuotas de administración no constituye una condena en perjuicios, como lo indica la apoderada de PROTECCIÓN en su recurso, sino que conforme lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia, ante la conducta indebida de la AFP al omitir su deber de información, esta debe asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital, pues estos dineros serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida.

Ahora, también mencionó la apoderada de Protección en el recurso de alzada que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de los montos a retornar. No obstante, la jurisprudencia se ha encargado de analizar el tema, extendiendo esos efectos de imprescriptibilidad de la pensión respecto de los gastos de administración.

Mediante sentencia de radicación SL2946-2021 emitida el 16 de junio, la M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, reitero que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales así como los derechos que de ella emanen son imprescriptibles, es decir pueden reclamarse en cualquier tiempo. Aunado a ello, en este tipo de procesos no se trata solo de revertir el acto de traslado, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, administradoras.

En sentencia SL1942-2021 adujo que:

Por último, cumple acotar que no prospera la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, como acertadamente lo dispuso el *a quo*, porque los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden solicitar que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales *en cualquier tiempo*, para que, por esa vía se reconozca a cuál de tales regímenes (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.

En definitiva, la mentada declaratoria de ineficacia es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.

Y luego en la SL2208-2021 señaló:

En cuanto a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, debe precisarse que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, ha afirmado que, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en CSJ SL4360-2019).

En tal contexto, no es dable acoger los razonamientos de la recurrente, máxime cuando no podría desligarse la ineficacia de sus efectos, aduciendo que los derechos derivada de ella no prescriben (retornar a prima media), pero sus consecuencias sí (montos a devolver).

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente ADICIONAR el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Protección S.A., teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del

aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga), SL3207-2020 y SL1688-2019 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo)

Así mismo resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021, al momento de cumplirse la orden impartida, Protección deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados.

Finalmente, no se atenderá a la solicitud de la apoderada de COLPENSIONES de que se adicione la sentencia, en el sentido de indicar que la orden dada a PROTECCIÓN de devolver las sumas de dinero indicadas en la sentencia debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, toda vez que al no haberse fijado un plazo por el juez de primera instancia se entiende que su cumplimiento debe hacerse de forma **INMEDIATA**, una vez la providencia este en firme, por tanto lo solicitado por la apoderada sería incluso menos beneficioso para los intereses de COLPENSIONES.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **ADICIONÁNDOLA** en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia a Protección S.A. por no haber tenido éxito en el recurso y se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a favor de la demandante. No se condenará en costas a Colpensiones pues tuvo prosperidad en su recurso.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **MARTHA LUCIA QUICENO DURANGO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.762.125 contra **PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Se **ADICIONA** el numeral segundo del fallo, bajo el entendido que **PROTECCIÓN S.A** trasladará a **COLPENSIONES** los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, debidamente **INDEXADOS** al momento del pago, oportunidad en la que además deberá discriminar los conceptos entregados a dicha administradora, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de Protección y a favor de la accionante, por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

Los magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **MARTHA LUCIA QUICENO DURANGO**
Demandado: **COLPENSIONES, y PROTECCIÓN S.A.**
Radicado No.: **05001-31-05-009-2020-00389-01.**
Decisión: **CONFIRMA Y ADICIONA**
Fecha de la sentencia: **05/08/2022**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 08/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario